

REFLEXIONES EN TORNO A LA LEY DE AMNISTÍA Y LA APLICACIÓN DENTRO DE UN SISTEMA PENAL ESPECIAL

Por: JHALYA DANNECY PIONO ASPRILLA¹

CARLOS NORLEY PALACIOS PALACIOS²

RESUMEN

El presente artículo parte de la comprensión del término amnistía desde el punto de vista jurídico, su relación al derecho penal enmarcado en un contexto comparativo con el término indulto, esclareciendo su diferencia y encaminando la concepción de su trascendencia hacia el contexto histórico de la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales (Ley 1830 de 2016). Se analizan las diferentes situaciones, en el marco de la ley, que ha tenido el país como la responsabilidad que tiene con la construcción y consolidación de la paz nacional, las negociaciones y resultados de las mismas para finalizar las guerras que acaban con el país y sus habitantes, la reparación a las víctimas y cómo estas afrontan el proceso a partir de una justicia transicional y tratamientos especiales que otorga la ley, y consigo la jurisdicción especial para la paz, y cómo el gobierno posibilita la acertada aplicación de la ley de amnistía mediante un sistema penal especial, sin vulneración a los derechos de las víctimas.

Palabras clave

Amnistía, indulto, tratamientos especiales, justicia transicional.

¹ Estudiante de Especialización en Derecho Penal. Cohorte XV. Universidad Libre, Seccional Pereira.

² Estudiante de Especialización en Derecho Penal. Cohorte XV. Universidad Libre, Seccional Pereira.

ABSTRACT

It begins by exposing the meaning of the term amnesty within the legal point of view of criminal law framed in a comparative context with the meaning in turn from the same point of view of the term pardon, clarifying its marked difference and directing the conception of its significance towards the historical criminal context of the Amnesty, Pardon and Special Criminal Treatment Act. It analyses the different situations, within the framework of the law, which the country has had as its responsibility for the construction and consolidation of national peace, the negotiations and the results of these negotiations to end the wars that destroy the country and its inhabitants, the reparation to the victims and how they face the process. On the basis of transitional justice and special treatment provided by law and with special jurisdiction for peace, and as the Government makes possible the successful application of the amnesty law through a special penal system, without violating the rights of the victims.

Keywords

Amnesty, pardon, special treatment, transitional justice.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo surge a partir de la comprensión del término amnistía como figura jurídica enmarcada en el plano histórico, primero entendiendo su significado desde el marco legal como el medio donde se deja a un lado de la historia la violación de los derechos que es interpretada por el legislador, lo que tiene como fin desaparecer la acción administrativa y reducir una condena ya establecida por multas que sean consideradas una sanción social, pero que no sean caracterizadas como una infracción penal.

En otras palabras, se entiende como la acción de excusar de la responsabilidad penal o civil de un delito, siendo este hecho accionado por la rama legislativa frente a las personas que hayan sido declarados culpables por realizar una violación a las leyes del Estado, y que por tanto se olvida o se suprime la sanción y los efectos de dicho delito.

Es importante distinguir la diferencia entre amnistía e indulto, puesto que es posible caer en una confusión; en tal caso, el indulto, aunque también es un recurso de poder que exime a alguien de afrontar una responsabilidad, es comprendido como una vía de extinción o perdón de una responsabilidad del ámbito penal, que puede concederse por medio del presidente o mandatario para condonar, aminorar o permutar un castigo impuesto por la culpabilidad del acusado.

Retomando la fuente anterior, se define como “un proyecto de ley presentado por el gobierno para dar beneficios, con el fin de permitir la desmovilización de los combatientes ilegales en el conflicto armado” (ONU, 2017), es decir, el acusado o autor del delito sigue considerándose culpable, pero con la medida del indulto se le exime del cumplimiento de la pena (también llamado indulto total), se le cambia por una “más suave” o se le absuelve gran parte de la misma (también llamado indulto parcial).

Desde de los significados anteriores, y teniendo claro estos conceptos fundamentales, se comienza por medio de la descripción del inicio u origen históricamente de la Ley de amnistía en Colombia, partiendo del preludio de los siglos XIX y XX como lo refiere AGUILERA (2017); los términos amnistía e indulto han provenido desde las diferentes guerras que ha vivido el país con grupos al margen de la ley, lo que ha permitido que los encargados de comandar estos conflictos armados, o los líderes del poder ejecutivo,

afamado por norma extraordinaria, se afiancen de las mismas guerras para perdonar e iniciar procesos de reconciliaciones.

Colombia se ha visto enfrentada, por diversos conflictos armados, en eventos como guerras civiles, violencia bipartidista o confrontaciones entre grupos al margen de la ley y el Estado, situaciones que llevaron al gobierno a proponer una solución llamativa que lograra convencer a los integrantes de dichos grupos y dejar la lucha, para lo cual se presentó un proyecto de ley buscando brindar una amnistía que permitiera la desmovilización en el conflicto armado, la llamada Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales (1820 de 2016), beneficiando consigo tanto a guerrilleros como a miembros de autodefensa de grupos armados al margen de la ley como las FARC-EP y el ELN, que ya hayan sido considerados culpables de participación en actos de guerra. La ley se ha aplicado no solo a hechos punibles cometidos en combate o delitos políticos, sino también a delitos más frecuentes considerados graves, como el homicidio, el secuestro, y delitos leves, como la desertión, la injuria o calumnia.

La amnistía ha sido un instrumento jurídico de uso corriente a lo largo de la historia colombiana; busca la reintegración de los miembros de estos grupos armados a la sociedad, para así contribuir eficientemente a la consolidación de la paz nacional, aunque la historia no haya favorecido la paz en el país sino hasta hace unos pocos años.

Con la constitución de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se han adoptado medidas de amnistía que el pueblo colombiano en muchas ocasiones no entiende, puesto que se ven envueltos no solo en los pocos castigos que reciben las personas que les hicieron daño, sino que suelen ligar la ley con la impunidad, obviando todo lo que esto implica como las garantías de verdad, reparación y no repetición, que para muchas situaciones son más importantes que la pena carcelaria.

En este sentido, se exponen los criterios necesarios que permitirán identificar cómo se adopta la ley amnistía en Colombia por medio del sistema penal especial, garantizando la protección de las víctimas del conflicto, basados en la pregunta que guía este artículo: ¿La Justicia Especial para la Paz (JEP) le podrá dar una acertada aplicación a la ley de amnistía mediante un sistema penal especial, sin vulnerar los derechos de las víctimas?

Lo anterior enmarcando como primer paso la realización de un estudio de la ley de amnistía, indulto y tratamiento penal especial en Colombia, como segundo paso identificando los beneficios que tienen las personas que son cubiertas por la ley de amnistía, y por último, investigando cómo el aparato judicial colombiano va dar manejo a la justicia transicional.

El presente artículo tiene como fin realizar una exposición precisa de los criterios necesarios que permitirán identificar cómo se adopta la ley amnistía en Colombia por medio del sistema penal especial, garantizando la protección de las víctimas del conflicto, por medio de un estudio general de la normatividad nacional, frente al origen y aplicación de la ley y de sus beneficiarios.

1. LEY DE AMNISTÍA E INDULTO

Quizá para muchas personas, al referirnos el término “amnistía”, puede ser asociado a impunidad, ya que por las características propias de este modelo de tratamiento especial de justicia implica, en muchas ocasiones, que no se purgue ningún tipo de pena privativa de la libertad en centro penitenciario, como comúnmente se conoce como la administración de justicia, en otras palabras, las personas han creído en su imaginario colectivo que la única manera de que haya justicia es que la persona quien cometió la conducta vaya a la cárcel, y al no suceder esto y recibir otro tipo de tratamiento, se

crea que hubo impunidad, lo que quizá tenga algo de verdad, no puede ser refutado completamente, puesto que debido a las características propias de la amnistía se puede entrever elementos o características semejantes a la impunidad, ya que la persona responsable de la causación del delito –como se advirtió anteriormente– no purga ningún tipo de pena; sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que la amnistía es un medio y/o tratamiento para aplicar justicia bajo condiciones especiales que con posterioridad serán analizadas conjuntamente con la justicia transicional, el indulto y los tratamientos penales especiales.

En cuanto a la amnistía, se puede decir que esta, respecto a su significado con la ley penal, es un artilugio de cese de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal por comportamientos vinculados al conflicto armado (MINISTERIO DE JUSTICIA DE COLOMBIA, 2017).

Según el Dr. WALDO ORTUZAR (1991), Doctor en Derecho y docente de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, la amnistía es simple y llanamente “perdón y olvido”, y expone que, aunque se haya hablado o mencionado mucho acerca de la amnistía como institución o material político, constitucional y penal, existe un acuerdo acerca del derecho de gracia, y es que se establece por medio de una institución de paz el perdón o el olvido como símbolo o representación de un pasado que se dejó.

En complemento a lo anterior, y desde el punto de vista penal y procesal, la amnistía va más allá que el perdón y el olvido que expone ORTUZAR (1991). Al respecto, el mencionado autor afirma que si se incumple con las características fundamentales del perdón y la verdad, desde el punto de vista del derecho penal, es posible desmerecer de dicho beneficio, por tanto es menester del gobierno y de la justicia especial para la paz, quienes otorgan dichos perdones y absoluciones de condena y demás, revisar y atender a la esencia de dicho perdón y verdad, pues realizar una aplicación errónea iría

en contradicción con los principios y las normas que rigen en el derecho penal.

En otras palabras, en concordancia con lo dicho por el Dr. ORTUZAR (1991), es necesario que la amnistía obedezca únicamente a la aplicación de aquellos delitos que han sido considerados o declarados amnistiables, como el caso de los delitos políticos y las faltas ligadas a estos, como por ejemplo en el caso de Colombia con el acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno Nacional, donde muchos combatientes que se sometieron voluntariamente a dicho acuerdo de paz recibieron amnistía en todos aquellos delitos políticos y los conexos a este, puesto que era lo lógico y lo permisivo de acuerdo con organismos internacionales de justicia, quienes siempre estuvieron al pendiente que la fuera aplicada de manera correcta para evitar la amnistía de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra, ya que estos, según ha establecido la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011) y la Corte Penal Internacional (2006), no pueden ser amnistiables bajo ninguna medida.

Ya conocida la amnistía, es menester y apropiado hablar del indulto, puesto que existe por parte de muchas personas la equivocada concepción que, entre uno y otro, no hay distinción alguna, es decir, amnistía e indulto significan exactamente lo mismo, lo cual no es del todo cierto y se procederá con su explicación en las líneas subsiguientes.

Así las cosas, en cuanto al indulto, vale la pena precisar que el mismo es utilizado para el perdón de la pena, mientras que la amnistía como tal es utilizada o aplicada para el perdón del delito, por consiguiente el primero de ellos se puede dar cuando una persona ya esté purgando una pena en un centro carcelario por la realización de cierto delito (de carácter político y conexos al mismo), mientras que la amnistía se aplica principalmente al inicio

del proceso penal, tal como sucedió con muchos de los guerrilleros acogidos al proceso de paz, que al someterse a este recibieron una amnistía para no purgar ningún tipo de pena, sin embargo la aplicación de la amnistía requiere el compromiso de cierto tipo de obligaciones, como en el caso colombiano en cuanto al proceso de paz, significa la comparecencia a la Jurisdicción Especial de Paz cada vez que este los requiera.

La amnistía consiste, según lo menciona el COLECTIVO DE ABOGADOS (2018), en el impedimento del juicio contra el acusado y en absolver al mismo de su pena; por su parte, el indulto consiste en, después de la declaración de culpabilidad del o de los acusados, aplicar el perdón en su condena y eximirle de la aplicación de la pena parcial o totalmente. En el caso entonces del Acuerdo de Paz con el grupo armado de las FARC, estas dos herramientas de perdón mencionadas serían aplicadas a los combatientes acusados de delitos como sedición, rebelión, asonada, sin embargo los delitos como secuestro, reclutamiento de menores y los demás considerados como crímenes del conflicto armado deben precisarse en la jurisdicción especial para la paz, sin aplicación a crímenes de guerra ni violaciones de los derechos humanos.

Por otra parte, en cuanto a los tratamientos penales especiales, o también conocidos como tratamientos especiales de justicia, la legislación colombiana recientemente respecto al marco del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, por medio del Ministerio de Justicia planteó diferentes tratamientos penales especiales o tratamientos especiales de justicia, entre los que se encuentran los anteriormente nombrados, amnistía e indulto.

Concretamente, frente a los tratamientos penales especiales la legislación colombiana y el Ministerio de Justicia de Colombia, en concordancia con lo dispuesto por organismos internacionales, la Constitución Política de

Colombia (1991) y todo lo que integra el bloque de Constitucionalidad como convenios y tratados internacionales, dispuso que:

En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuenta con diferentes tipos de procedimientos especiales de justicia, como lo refiere el Ministerio de Justicia de Colombia, 2017, puede ser por derecho, a través de sala de amnistías de la JEP, por imposición de sanciones propias del sistema con función reparadora, imposición de sanciones alternativas cuando existe una evocación de responsabilidad, pero cuando no se reconoce la responsabilidad se aplica una sanción privativa de la libertad de 20 años aproximadamente, entre otras objeciones u opciones.

Así mismo, los tratamientos especiales de justicia, se otorgan para conseguir a su vez la finalidad definitiva del conflicto armado y el regocijo por el acceso a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, como lo establece la ley, cualquier tratamiento especial estará limitado a la contribución en la satisfacción de los derechos de las víctimas (MINISTERIO DE JUSTICIA DE COLOMBIA, 2017).

En otras palabras, este tipo de sanciones se aplica a todas aquellas personas que fueron parte del conflicto armado colombiano, y que durante la vigencia del mismo conflicto cometieron crímenes políticos afectando a la población en general y al Estado mismo, sin dejar de tener en cuenta que TANTO agentes Estatales como militares, pertenecientes al ejército nacional, también fueron personas que cometieron delitos en contra de la población civil y actualmente se encuentran sometidos a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Los tratamientos especiales aplican para combatientes, agentes del Estado o terceros (civiles), que cometieron “*conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado*” (MINISTERIO DE JUSTICIA DE COLOMBIA, 2017).

Sin embargo, es oportuno aclarar que no solo las personas aquí nombradas han sido sometidas a tratamientos especiales de justicia; allí se encuentran narcotraficantes, políticos y grupos armados al margen de la ley, paramilitares y empresarios que no fueron directamente parte del conflicto pero que, de una manera u otra, mediante sus actuaciones beneficiaban o contribuían con uno u otro actor del conflicto armado.

Además se, profundiza sobre la distinción de los delitos políticos, comprendiendo su variedad y su diversa naturaleza. Como lo expone la legislación colombiana y el Ministerio de Justicia (2017) existen diversos delitos políticos, entre los cuales se pueden encontrar violaciones de habitación ajena, ilícita de comunicaciones, de libertad de trabajo, injuria, calumnias, falsedades de materiales particulares, personal, fraudes, corrupción, daño al bien ajeno, espionaje, votos fraudulentos, violencia contra servidor público, entre otros, dentro de los cuales unos pueden parecer más perturbadores que otros, pero todos son enmarcados entre la categoría de delitos amnistiabiles en el ordenamiento jurídico colombiano, y por consiguiente, obviamente, son sujetos de aplicación de indultos o amnistías si así lo llegará a determinar la Jurisdicción Especial de Paz (2017), quien es la encargada de evaluar cada uno de los casos por medio de sus Tribunales, de las personas acogidas o cobijadas por dicha corporación especial de paz.

Si bien es cierto que hasta el momento se ha hablado mucho del caso colombiano, y cómo el Estado colombiano concede y/o aplica los mecanismos alternativos de justicia penal o tratamientos penales especiales,

también es cierto que no se puede desconocer la influencia de organismos internacionales que tienen vigilancia, aplicabilidad y coerción sobre Colombia, toda vez que como Estado soberano e independiente, por medio de la suscripción de tratados y demás, ha aceptado que entidades u organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derecho Humanos y la Corte Penal Internacional, tengan campo de acción como organismos vigilantes y garantes para que en Colombia no se vulneren derechos humanos, y la aplicación de justicia sea conforme a los acuerdos internacionales como el Estatuto de Roma (1998).

Así pues, dichos organismos internacionales (CIDH y CPI) han desarrollado ciertos criterios para la prohibición de leyes de amnistía, estableciendo que tanto la existencia de inconvenientes legales, como la promulgación de leyes, instaurados jurisprudencialmente, pueden resultar incompatibles con el derecho a la protección judicial descrito en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1978), que refiere precisamente que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los jueces o tribunales competentes, que lo ampare contra actos que violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención; puesto que se plantean impedimentos para acceder a la información enmarcando tales hechos en una violación de derechos fundamentales.

Dichos organismos promueven entonces que, una vez establecidas las leyes correspondientes para brindar amnistía o indultos a grupos combatientes o al margen de la ley en un país como Colombia, solo gocen de sus beneficios aquellos quienes no cometieron delitos graves acorde al Derecho Internacional Humanitario.

Así mismo, los tratamientos penales especiales, los cuales a su vez comprenden la amnistía y el indulto, son mecanismos eficientes para la terminación de un conflicto, tal como sucedió en el caso colombiano, donde

se demostró que el conflicto no podía acabarse por vía militar, y que tampoco se iba a terminar con un acuerdo donde todos los guerrilleros y demás actores del conflicto terminaran pagando altas penas en centros carcelarios; sin embargo, dichas medidas son aún incomprendidas y poco recibidas por el pueblo mismo, ya que las personas tienden a asociarlas con la impunidad, obviando todo lo que esto implica como las garantías de verdad, reparación y no repetición, que en muchos casos son más importantes que la pena carcelaria que pueda pagar el autor de un crimen.

Además, cabe mencionar que este tipo de tratamientos penales especiales no pueden ser realizados por capricho del Estado y del legislador, debido a que, como en el caso de Colombia, hay organismos internacionales garantes y observantes de que estos tratamientos sean aplicados de la mejor manera sin vulnerar derechos humanos y fundamentales.

Por otro lado, las altas cortes y el legislador se han manifestado a lo largo de los años frente a cómo se debe adoptar cada una de las medidas que van surgiendo normativa y legalmente dentro del ordenamiento colombiano, siendo principalmente el caso de la Sentencia C-577 (CORTE CONSTITUCIONAL, 2014), donde se realizan los primeros acercamientos jurisprudenciales frente a cómo se debe establecer los diferentes límites frente al otorgamiento de la amnistía o el indulto a las personas que han sido parte activa dentro del conflicto armado, como también garantizar que no habrá extradición frente a aquellos que cumplan con cada uno de los requisitos que tienen las diversas leyes y acuerdos a los que se ha llegado con el gobierno.

El Consejo de Estado (2019) en su más reciente fallo establece que la amnistía se convierte en un beneficio otorgado por la ley dentro de sus límites, debido a que solo puede ser brindado para las personas que hayan cometido delitos que atenten contra el bienestar social como los de rebelión,

sedición, asonada entre otros. Así mismo, dictamina que estos beneficios pueden ser acogidos por personas que tengan nacionalidad extranjera y que cumplan con los requisitos establecidos dentro de la Ley 1820 de 2016, la cual tiene todos los mandamientos y directrices a los que deben ser sometidas cada una de las personas de manera discriminada, para determinar a cuáles pueden acceder.

A partir de las normas que se encuentran vigentes en el país, referentes al tema principal de este artículo, que es cómo la ley de amnistía es tratada por un sistema penal especial, se evidencia que dentro del ordenamiento colombiano se le han dado diferentes prebendas a todos aquellos que hicieron parte del conflicto como victimarios. A pesar de las sanciones que trae consigo el sistema penal ordinario para aquellas personas que cometen delitos como el homicidio, secuestro, extorción, entre otros, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la encargada de imponer todo el peso de la ley en compañía con la ley de amnistía, genera una desigualdad frente a las condenas que reciben los del sistema ordinario.

Es así como se prosiguió a reconocer cuáles eran las medidas que iba a tomar el gobierno para no afectar a todas las víctimas del conflicto con esta ley que le da beneficios especiales a todos los que la misma cubre. Es así como se evidencia que a las personas que fueron afectadas por los grupos al margen de la ley se les ofrece la no repetición y la verdad de cada uno de los actos que se cometieron durante los 60 años de guerra que hubo entre el gobierno y estos grupos.

Por otro lado a los victimarios, al colaborar con la justicia y tener todos los delitos carácter de crímenes políticos, dado que estos fueron cometidos en un alza de armas contra las reglas e ideología del Estado, se pactó una reinserción a la sociedad y la facultad de tener curules dentro del Senado de la República.

Así mismo el Estado, con el propósito de proteger tanto a la víctima como al desmovilizado, ha creado comisiones especiales para el manejo de la verdad y el reconocimiento simbólico de la misma, teniendo como fin el reconocimiento real de todos aquellos que fueron víctimas.

En complemento con lo anterior, dentro de la ley de amnistía se ha dejado en claro que las personas que cometan delitos después de la firma del acuerdo final para la paz deberán comparecer al sistema penal ordinario y ser tratado con la ley que para esta jurisdicción es competente, dado a que los delitos políticos se acabaron al momento de la cesación del conflicto armado, como se refiere en la JEP (2016).

CONCLUSIONES

El gobierno, con el fin de brindar una protección a los derechos que tienen tanto las víctimas como los victimarios desmovilizados, generan una aplicación de la ley de amnistía, en especial, en cuanto a las garantías que ofrecen para mitigar los daños, siendo injustos los beneficios que otorgan a los desmovilizados comparado con los que obtienen las víctimas; por tanto se dificulta para el Estado ofrecer una protección y una garantía de mitigación de daños o reparación total e integral a las víctimas del conflicto, y esta no es objetiva.

El Estado colombiano ha brindado beneficios a los victimarios del conflicto, en cuanto las condenas y las sanciones que tiene que pagar por haber sido participante de los grupos al margen de la ley, mediante la ley de amnistía, no obstante, esta misma ley discrimina el tipo de condena que debe sufrir cada persona dependiendo de su cargo y de los delitos que se le atribuyan, generando un retroceso en la misma, además de la inconformidad de las víctimas y ciudadanos en general tras haber sufrido 60 años de conflicto.

El Estado colombiano le va a dar manejo por medio de la justicia transicional a aquellas personas que hayan cometido los delitos antes de la firma de los acuerdos, pero a las personas que se les compruebe que cometieron delitos posteriores a este hecho no serán cubiertos por dicha ley de amnistía, sin embargo el impacto que genera en la sociedad colombiana es de impunidad e inseguridad jurídica, puesto que se ha comprobado que no se termina con el conflicto por vía militar, y al haber delitos de lesa humanidad que no cubra la ley por ser cometidos después del acuerdo, es posible pensarse que tampoco baste con solo cubrir un porcentaje de amnistía, sino que la ley debería referirse en medidas que garanticen la verdad, la reparación de los daños y la no repetición de los actos violentos.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILERA, M. (2017). "Amnistía e indultos, siglo XIX y XX". En: *Banco de la República*. Disponible en: <http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-137/amnistia-e-indultos-siglos-xix-y-xx>

BITAR, S. (2006). "Cuando los autores no estatales sí importan: el caso de Amnistía Internacional". En: *Colombia Internacional* (63)190-197. Disponible en: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint63.2006.09>

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL (2019). *¿Qué es la justicia transicional?* Disponible en: <https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>

COLECTIVO DE ABOGADOS (2018). *¿Qué son la amnistía y el indulto?*
Disponible en: [https://www.colectivodeabogados.org:
https://www.colectivodeabogados.org/?Que-son-la-Amnistia-y-el-
indulto](https://www.colectivodeabogados.org:https://www.colectivodeabogados.org/?Que-son-la-Amnistia-y-el-indulto)

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2016). Ley 1820. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Disponible en: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1820_2016.html

CORTE CONSTITUCIONAL (2018). Sentencia C-007. Procedimiento legislativo especial para la paz. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-007-18.htm>

CHAPARRO, N. (2013). *Amnistía e indulto en Colombia: 1965-2012*. Universidad Nacional de Colombia, Master en Derecho. Disponible en: <http://bdigital.unal.edu.co/39944/1/1052380923.2013.pdf>

ENCICLOPEDIA JURÍDICA (2014a). *Definición de amnistía*. Disponible en: <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/amnistia/amnistia.htm>

ENCICLOPEDIA JURÍDICA (2014b). *Definición de indulto*. Disponible en: <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/indulto/indulto.htm>

GUERRERO, V. (2004). "Breve historia de la amnistía e indultos en Colombia". En: *Foro Constitucional Iberoamericano* (9). Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/30047137.pdf>

GUEVARA, S. & PALOMINO, M.G. (2006). "Leyes de Amnistía: Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos". En: *Revista do Instituto*

Brasileiro de Direitos Humanos, (7). Disponible en:
<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28160.pdf>

GUTIÉRREZ, L.F. (2015). “Justicia transicional en Colombia: hacer justicia o negociar la paz. Estudio comparativo”. En: *Cuadernos de Derecho Penal* (13). Disponible en:
https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/cuadernos_de_der_echo_penal/article/download/457/519

HOWLAND, T.M. (2017). “Amnistías y tratamientos penales especiales diferenciados: ¿un acierto en la construcción de la paz?”. En: *Razón pública*. Disponible en:
<https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10061-amnist%C3%ADas-y-tratamientos-penales-especiales-diferenciados,-un-acierto-en-la-construcci%C3%B3n-de-la-paz.html>

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Alto comisionado para la paz. Disponible en:
<http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) (2018) *Glosario*. Disponible en:
<https://www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/glosario.aspx>

MINISTERIO DE JUSTICIA DE COLOMBIA (2017). *ABC Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales*. Disponible en:
<https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/pdf/ABC%20amnistia.pdf>

- OLARTE, Y. (2017). "Amnistía y proporcionalidad desde el punto de vista del Estatuto de Roma en el marco jurídico para la paz en Colombia". En: *Revista IUSTA* (47). Disponible en: <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta/article/view/3808>
- ORTUZAR, W. (1991). "La Amnistía desde el punto de vista del derecho procesal penal". En: *Revista Chilena de Derecho*, (8) 1. 125-136. Disponible en: <https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/14498/000128165.pdf?sequence=1>
- RÚA, C.F. (2015). "Los momentos de la justicia transicional en Colombia". En: *Revista de Derecho* (43). 71-109. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n43/n43a04.pdf>
- VALDERRAMA, F.J. & ORTIZ, M.O. (2017). "Justicia transicional: Noción de la justicia en la transición colombiana". En: *Revista Opinión Jurídica* 16(32). 245-266. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v16n32/1692-2530-ojum-16-32-00245.pdf>